

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta 200

Medellín, primero (1º) de agosto de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso interpuesto, en el proceso ordinario laboral interpuesto por **FRANCISCO JAVIER GARZÓN MORENO contra PROTECCIÓN S.A., Y LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ.**

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El actor solicita que se condene al reconocimiento de la pensión de invalidez desde la fecha de la estructuración de la invalidez, es decir, desde enero de 2017, intereses moratorios o indexación y costas del proceso.

Hechos

El actor laboró en “Atempi” como guarda de seguridad, fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez por medio de Dictamen 71555978-2658 del 4 de octubre de 2017, entidad que le asignó una pérdida de capacidad laboral de 50.21%, de origen común y la cual no fue objetada.

Presentó reclamación ante la entidad el 8 de noviembre de 2018, radicando toda la documentación solicitada para acceder a la prestación.

Respuesta de Protección S.A.

Manifiesta la apoderada que en el caso no existe un Dictamen en firme, toda vez que cuando fue notificada interpuso el recurso respectivo ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, del 18 de diciembre de 2019.

Así mismo no existe mora en razón a que no existe la certeza de una pérdida de capacidad laboral, además esta se cuenta cuando el actor presenta toda la documental completa.

Debe probarse en el proceso que el actor acredita todos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez que solicita.

Es cierto que reclamó la prestación el 8 de noviembre de 2018, pero no existe un Dictamen en firme.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Falta de Causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción y petición antes de tiempo.

Contestación Junta Nacional de Calificación de Invalidez:

Manifestó el apoderado que la Junta Nacional es ajena al reconocimiento pensional, conoció del recurso de apelación que fue interpuesto por el Fondo de pensiones y en el mismo se consideró que debía modificarse la calificación en cuanto a la pérdida de capacidad laboral, en la cual se otorgó el 42.25%, en razón a que se encontró sobre valorado el porcentaje asignado por la deficiencia de la “diabetes mellitus”.

Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones: Carencia de objeto, no existe objeto de controversia legalidad de la calificación, la variación clínica con posterioridad al dictamen exime la Junta.

Sentencia de primera instancia

La Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **25 de mayo de 2022**, absolvió de las pretensiones de la demanda, por encontrar que el actor no acredita los requisitos para acceder a la pensión de invalidez.

En el proceso no se cuestionó dictámenes, sino que únicamente aportó el de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, sobreviniendo luego un Dictamen de la Junta Nacional que declaró que el actor no tiene la calidad de invalido.

Recurso parte demandante

Para entender el caso es importante mencionar lo que ocurrió, en el caso el actor fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien le asignó un 50% de pérdida de capacidad laboral, dictamen que quedó en firme porque la misma junta lo certificó, fue notificado al demandante el 2 de noviembre de 2017.

El 8 de noviembre de 2018 un año después se agenda cita para el trámite de la pensión de invalidez, entonces mínimo desde esa fecha el fondo conoció que la Junta lo declaró invalido en su dictamen.

La misma entidad dijo que estaba completado el 95% del trámite de la pensión de invalidez y dijeron que solo faltaba agendar fecha para pagar la prestación, como es posible que no se hayan dado cuenta que tenían un recurso interpuesto ante la Junta Nacional, entonces no existía para cuando reclamó y solo se dijo con la contestación de la demanda.

Cuando se demandó se hizo con la papelería que existía para el momento, y posteriormente dijo el Fondo que existía un recurso que estaba pendiente de resolver por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, lo que lleva a que sea un hecho raro, sospechoso.

Lo anterior lleva a que cuando se demandó ya estaba en firme el Dictamen de la Junta Regional, con la constancia de que estaba en firme que emitió la señora Nelly Uran, el cual no fue tachado de falso, por lo que este es el valido, y la Juez no podía negar la pensión porque desconoció una prueba que se aportó con la demanda, debiendo reconocer la pensión y que el Fondo demandara a la Junta por el error en que incurrió, porque no podía conocer el recurso que interpuso el fondo frente al dictamen de la Junta Regional.

La Juez se equivocó en el caso al aplicar una norma indebida como la ley 100 de 1993, porque desconoció el convenio 159 de la OIT ratificado por Colombia, el cual es claro en decir que se es invalido cuando no tiene la posibilidad de tener un trabajo adecuado y eso está más que probado con el Dictamen de la Junta Regional, entonces debió fue acoger ese Dictamen que es más favorable (art. 53 Constitucional), y no el de la Junta Nacional que modificó la PCL.

El Juez no se puede apartar de una calificación en firme, además debe conceder los intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993, porque en el caso es clara la mala fe al no informarle al actor que había en curso un recurso que interpuso el Fondo, ello hizo que se creara una ilusión en el actor.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado establecido en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022. No se presentaron.

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto serán: i) Determinar cuándo se puede considerar en firme los dictámenes de pérdida de capacidad laboral de las Juntas Regional y Nacional, (ii) Si la Juez aplicó una norma incorrectamente y debe aplicarse el convenio 159 de la OIT preferible a la ley 100 de 1993 y si (iii) acredita el actor los requisitos para acceder a la pensión deprecada y los intereses de mora.

CONSIDERACIONES

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. El actor fue calificado por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez** de Antioquia, entidad que por medio de Dictamen 71555978-2658 del 4 de octubre de 2017 asignó una pérdida de capacidad laboral del 50.21%, origen común y estructurada el 13 de enero de 2017.
2. Como prueba sobreviviente se aportó el Dictamen 71555978-7963 del 24 de abril de 2020 de la Junta **Nacional de Calificación de Invalidez**, en el cual se modifica el porcentaje de pérdida de capacidad laboral otorgando el 42.35%.
3. El actor reclamó la pensión de invalidez el 8 de noviembre de 2018.

Una vez efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a dar respuesta a los problemas jurídicos propuestos.

Lo primero que la Sala debe dejar claro en el caso es que no se desconoce que para cuando se presentó la demanda aún no se había emitido el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el cual fue aportado como prueba sobreviviente cuando el proceso se encontraba en trámite, sin embargo, no son de recibo los argumentos que hace el apoderado de la parte actora en cuanto que no es posible realizar una valoración al Dictamen de esta última entidad porque cuando presentó la demanda la experticia de la Junta Regional se encontraba en firme como esta misma se lo certificó al actor.

Lo anterior, porque no es posible que la judicatura haga caso omiso al momento de proferir su decisión a una prueba que, aunque fue un hecho sobreviviente se encontraba ya en el proceso, sumado a que independiente que se observen en el caso que hubo un error por parte del Fondo al momento de que el actor solicitó la prestación en no informar que estaba cursando un recurso de apelación frente

el dictamen de la Junta Regional, así como tampoco esta entidad se lo comunicó, sin embargo sería atentar contra el debido proceso, fallar sin realizar una valoración en conjunto de la prueba.

Ahora bien, precisamente aun cuando en el caso se tenga que no se discutió nunca entre dos o más experticias, lo cierto, es que son circunstancias particulares el caso concreto y por eso la Sala entrará a estudiar teniendo en cuenta los dos Dictámenes aportados.

Calificación de la invalidez y porcentaje de pérdida de la capacidad laboral

De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, para efectos de la pensión de invalidez por riesgo común, se considera *“inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”*

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, el estado de invalidez debe ser determinado de conformidad con el Manual Único para la Calificación de Invalidez-MUCI- vigente a la fecha de calificación, indicando a su vez que corresponde a Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales, las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en primera oportunidad, el origen, fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Según el artículo 51 del CPT y SS, en el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, con la salvedad de la prueba pericial cuya admisibilidad solo será posible cuando tenga por objeto asesorar al juez sobre asuntos que requieran conocimientos especiales, como lo es precisamente el que tiene que ver con la pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración de una persona, aspecto de carácter técnico que se evalúa siguiendo los parámetros previstos en el Decreto 1507 de 2014-Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional-.

En lo que respecta a la validez del dictamen pericial, el artículo 226 del CGP aplicable al procedimiento laboral en virtud de la remisión establecida en el artículo 145 del CPT y SS, establece que, el mismo debe ser rendido por una persona especializada, debe ser presentado bajo la gravedad del juramento (el cual se entiende prestado con la firma del dictamen), debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones y debe tener un contenido mínimo de declaraciones e informaciones que den cuenta de la identidad, idoneidad e imparcialidad de quien lo rinde.

Para el caso se precisa que todos los Dictámenes como son el de Suramericana, Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Fueron realizados con el Decreto 1507 de 2014 por ser el vigente a la fecha.

Firmeza de los dictámenes:

Para resolver la petición, resulta de fundamental importancia recordar que la firmeza de los dictámenes emitidos por los órganos competentes no es definitiva y su valor probatorio puede ser atacado ante el juez laboral mediante el procedimiento ordinario, utilizando para el efecto diferentes medios probatorios que permitan demostrar que existe una pérdida de capacidad superior a la establecida, o que la fecha de estructuración puede ser anterior o posterior, o el **origen puede variar.**

Lo importante en estos casos es que se demuestre que incurrió la entidad calificadora en un error de carácter técnico, por cuanto aquellas que entrañan una controversia de orden jurídico están atribuidas al Juez del Trabajo. **(Sentencias 11910 del 29 de septiembre de 1999, SL16374 del 4 de noviembre de 2015 y SL4571 del 23 de octubre de 2019)**

La técnica, requisitos y procedimiento para la calificación de la invalidez se encontraba para la fecha de los hechos regulada por el Decreto 1507 de 2014 - Manual único de Calificación de Invalidez-MUCI-, y con base en esta norma lo realizó Seguros de Suramericana, por lo que cualquier ataque dirigido a desvirtuar la eficacia de los dictámenes emitidos por los órganos competentes, debe demostrar sus falencias técnicas evidenciando los errores en los que el experto o expertos incurrieron o aquellas patologías que se desconocieron al valorar las condiciones en que se encontraba la persona que fue calificada.

Dicha norma define el estado de invalidez *“Es la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al cincuenta por ciento (50%).*

Y la estructuración laboral como: *Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos.*

Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta PC) ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. ' Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación...

La Juez en su sentencia consideró que el Dictamen de la Junta Nacional que fue aportado al proceso como prueba sobreviniente al ser integrada la Junta Nacional por orden del Tribunal Superior de Medellín, era un Dictamen serio y claro que no tenía ningún tipo de error técnico encontrado.

La Sala al analizar la prueba en su conjunto bajo los criterios de la sana crítica y libre formación del convencimiento considera que en el presente caso no existen elementos de juicio para determinar que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, se hayan equivocado en su experticia al concluir que el actor únicamente acreditaba el 42.25% de pérdida de capacidad laboral y que fue sobre valorado, vemos lo que al respecto dijo en su Dictamen.

“Se encuentra que efectivamente el valor asignado a diabetes por la Junta Regional de Calificación de Invalidez está sobrevalorado, dado que a lo largo de la historia se menciona que esta medicado únicamente con metformina, no hay daño renal secundario a esta enfermedad endocrina y la hemoglobina glicosilada está controlada, es decir debe calificarse con clase 1 en factor principal y factor modulador de la tabla 8.10 del Decreto 1507 de 2014”

Para columna lumbar se encuentra que hay limitación funcional, radiculopatía y dolor, por eso se califica con estado postquirúrgico con severas alteraciones clínicas, limitación severa de movimientos y radiculopatía única. El valor de hipertensión arterial es clase 1 en la tabla 2.6 del 1507, dado que no hay daño cerebrovascular, renal, ni cardíaco documentado.

Respecto al título II del decreto 1507 de 2014 (otras áreas ocupacionales, rol laboral, edad y participación económica), la realidad que está probada en la historia es que el trabajador tenía trabajo habitual de vigilante y llevaba incapacitado mínimo 2 años, sin actividades de rehabilitación laboral e intento de reintegro laboral, es decir que no hay pruebas aportadas por el Seguro Previsional - Fondo de Pensiones, no aporta pruebas que permitan modificar el rol laboral y la autosuficiencia económica.

Lo primero que se observa de la historia clínica como de los diferentes dictámenes es que, en efecto el actor comenzó a consultar por varias dolencias como estenosis espinal, trastorno de disco lumbar, hipertensión esencial, diabetes mellitus etc. Sin embargo, se encuentra por ejemplo que respecto de la “diabetes mellitus”, es una enfermedad que en efecto fue sobre valorada por la Junta Regional, teniendo en cuenta que siempre ha estado debidamente controlada hasta el punto que únicamente injiere medicamentos de forma oral (metformina), no es insulino dependiente, no se observa afectación a los riñones u otros órganos derivados de esa enfermedad.

De la historia clínica se tiene que incluso la mayoría de las citas tenían que ver era por secuelas lumbares que le dejó una caída que sufrió en una silla y por las cuales fue operado de columna, sin embargo, a la patología de “diabetes mellitus” fue a la que más porcentaje le aplicó la Junta Regional asignándole un

20% del capítulo 8 tabla 8.10, mientras que la Junta Nacional le aplicó un 5% del mismo capítulo y tabla, precisamente porque es una enfermedad que estaba bien manejada, especialmente en la glicemia glicosilada que es el examen que cada 3 meses muestra el manejo de la enfermedad en este tiempo, mientras que a los trastornos de columna aplicó un 31%, por ser la enfermedad que sobre sale al actor y que más está documentada en la historia clínica.

Si bien se observa que se hace mención a que el actor estaba incapacitado por los problemas lumbares en un largo periodo, no se encuentran recomendaciones médicas ni está el concepto desfavorable de rehabilitación que permita inferir que ya concluyó su tratamiento sin que haya posibilidad de una recuperación y menos sobre la enfermedad de “diabetes mellitus” a la que mayor porcentaje le aplicó la Junta Regional.

El material aportado, análisis de los Dictámenes de la Junta Regional y Nacional encuentra la Sala que el Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Antioquia narró de una forma clara, precisa, detallada y objetiva cuáles fueron sus métodos evaluativos, explica las razones por las que consideró que la pérdida de capacidad laboral no era del 50%, sino del 42.25%, porque existía una sobrevaloración de la enfermedad, aspectos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones de validez y eficacia de la prueba pericial consagradas en el artículo 226 del CGP, por lo tanto encuentra esta Sala convencimiento en la misma para declarar que el señor Francisco Garzón Moreno, no ostenta la calidad de invalido, al menos para el momento que la Junta Nacional emitió el dictamen 24 de abril de 2020.

La corte Suprema de Justicia sobre el tema de los dictámenes ha expresado en sentencias como la **SL2349 de 2021 del 28** de abril de 2021 **MP Iván Mauricio Lenis** que:

Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama. Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración.

Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción. Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...). Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697- 2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa medida, el juez no puede simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona.

De la pensión de invalidez

Para el presente caso al estar establecido que el actor no acredita una pérdida de capacidad laboral superior al 50% es claro que no cumple con los requisitos de la norma aplicable al caso que lo es el art. 39 de la ley de la ley 100 de 1993 modificada por el art. 1° de la ley 860 de 2003.

Ahora bien, atendiendo a la solicitud que realiza el apelante en cuanto que debe aplicarse el convenio 159 de la OIT, porque es norma superior y más favorable a los intereses del actor, debe decirse que no se comparte esa interpretación por lo siguiente:

En primer lugar, no desconoce la Sala que los Convenios de la OIT hacen parte del bloque de Constitucionalidad y por tanto son normas superiores de obligatorio cumplimiento, sin embargo, para el caso es importante dejar claro que la legislación Colombiana tiene norma interna que determina cuando una persona se considera invalida y que es al acreditar una pérdida de capacidad laboral superior al 50%., ley 100 de 1993, norma que por demás no se encuentra que este en contravía con el mencionado convenio 159.

Si observamos esa norma encontramos lo siguiente:

El artículo 1 de la Convención 159 de la OIT reza: *A los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida.* (negrilla de la Sala)

A los efectos del presente Convenio, todo Miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la sociedad.

Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Convenio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y conformes con la práctica nacional.

Al analizar dicha norma vemos como el mismo artículo del Convenio al estudiarse de manera juiciosa dice que será inválida una persona cuando sus capacidades queden reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida, es decir, calificada por la autoridad competente.

Entonces al no encontrar como lo dice el recurrente que la Juez realizó una aplicación indebida de la norma, porque es la legislación interna que nos cobija en materia pensional, pero además porque no se está, atentando ni contra la dignidad de la persona humana o contrariando las disposiciones del convenio, donde si sería aplicable, pues la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, Art. 27 establece: “El derecho interno y la observancia de los tratados. *Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado*, lo que no ocurre desde ningún punto de vista para el caso.

Además, porque el recurrente está partiendo de un entendimiento errado, toda vez que el Convenio 159 mencionado tampoco dice de suyo que se reemplaza la calificación que declare inválido a una persona o que sí internamente no lo declaran inválido pueda acudir a esta norma, únicamente por el principio de favorabilidad.

Y es que para el caso no se observa una indebida aplicación normativa por parte de la Juez de conocimiento, quien luego de apreciar la prueba determinó la misma conclusión a la que llegó esta Sala en cuanto que el Dictamen de la Junta Nacional no adolece de errores groseros que merezca ser dejado sin efecto o no tenerse en cuenta como lo pretende el recurrente.

Ahora respecto a la posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad al caso concreto, la Sala considera que no es posible, en razón a que este principio es aplicable en la valoración normativa, no en la valoración de la prueba, pues esta última se realiza una valoración en conjunto bajo los criterios de la sana crítica y la libre formación del convencimiento (art. 60-61 CPT y SS), Corte Suprema SL 2349 de 2021.

“En efecto, teniendo en cuenta que el juez laboral debe apoyar su decisión en los dictámenes obrantes en el proceso, con observancia de su contenido informativo y técnico, y que el dictamen no constituye prueba definitiva e incuestionable en el marco del proceso ordinario, el Tribunal en uso de sus facultades de libre formación del convencimiento, a partir de la valoración autónoma de la prueba, podía privilegiar la aclaración al dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad

de Antioquia para resolver el conflicto (SJ SL3992-2019, CSJ SL2984-2020 y CSJ SL513-2021).

Es decir, es que para el caso luego de hacer una valoración estricta del material probatorio, de los dictámenes en disputa, la historia clínica del actor y su evolución, se consideró que el dictamen más acertado era el de la Junta Nacional de Calificación, porque el de la Junta Regional tuvo una sobrevaloración en la enfermedad “diabetes mellitus”, la cual está debidamente controlada al menos para el momento de la experticia.

En el caso se repite que efectivamente se observa que hubo inconvenientes de orden administrativo en el caso de la notificación de la experticia al fondo privado como la misma apoderada lo manifestó en sus alegatos y que llevó a que pasara tanto tiempo para poder recurrir la experticia, lógicamente porque no se la habían notificado debidamente, sin embargo mal haría esta Sala en desconocer que con posterioridad se arrió un Dictamen de la Junta Nacional donde desató ese recurso y que declaró que el actor no es inválido, lo que por demás también se analizó y concluyó en esta instancia.

Por lo anterior se encuentra que la sentencia de primera instancia está ajustada a derecho y debe ser **Confirmada**.

Costas

Sin costas en esta instancia

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR la providencia de primera instancia dictada por la Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín, el día **25 de mayo de 2022**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **FRANCISCO JAVIER GARZÓN MORENO** contra **PROTECCIÓN S.A., Y LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ (integrada)**, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Francisco Javier Garzón Moreno
DEMANDADO	Protección S.A. y Junta Nacional de C.
RADICADO	05001-31-05- 015-2019-0612-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 02 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 02 de agosto de 2022 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO